

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA (pp. 2-8)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A NAVARRA (pp. 9-15)

JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad Pública de Navarra

Sumario: 1. Introducción. 2. Mejores técnicas disponibles e inviabilidad económica en la reducción de vertidos. 3. Contaminación acústica de las campanas de una iglesia: exclusión de los límites para las llamadas al culto pero no para los avisos horarios. 4. Sanciones ambientales. 5. Relación de sentencias comentadas.

1. Introducción

De las sentencias recaídas en este período, destacan dos que estiman, al menos en una parte, los recursos presentados contra las correspondientes resoluciones administrativas. Una de ellas trata de la imposición de valores límite de emisión en una autorización ambiental integrada que se consideran excesivos por su inviabilidad económica, a pesar de que las emisiones autorizadas eran las establecidas en la normativa de aplicación. La otra trata sobre la contaminación acústica de las campanas de una iglesia. La sentencia introduce la distinción entre las campanadas para llamar al culto (que están excluidas de los límites sonoros establecidos reglamentariamente) y los avisos horarios del reloj (que están sometidos a dichos límites).

El resto de las sentencias son confirmatorias de las sanciones impuestas por infracción de la normativa ambiental y rechazan los distintos motivos utilizados por los recurrentes para oponerse a ellas.

2. Mejores técnicas disponibles e inviabilidad económica en la reducción de vertidos

La autorización ambiental integrada para una instalación de fabricación de productos químicos incluyó, entre otras, la de que el vertido de cloruros no superara los siguientes límites: 13,2 t/día hasta el 31 de diciembre de 2010 y 2 g/l desde el 1 de enero de 2011.

La titular de la licencia recurrió en alzada y, posteriormente, en vía contenciosa por considerar disconforme a derecho la segunda de las condiciones. La Sentencia rechaza, en primer lugar, la pretensión de nulidad de la resolución por motivos formales (ausencia de procedimiento e incompetencia manifiesta).

Los otros motivos de oposición presentan mayor interés. La recurrente considera que la reducción de los límites del vertido resulta injustificada por apartarse del precedente y del informe vinculante de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y, también, porque las soluciones técnicas necesarias para realizar la reducción resultan

económicamente inviables, especialmente por el corto tiempo de vida que resta a la explotación, que previsiblemente deberá cesar en el año 2010.

La Sentencia niega que no exista motivación y que se hubiera apartado del precedente, dado que respecto de los precedentes existe una novedad normativa cuya aplicación justifica el cambio de criterio de la Administración.

Esa nueva normativa es el Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

Dicho Decreto Foral establece en su anexo 3 los valores límite de vertido de contaminantes. Y es el que se aplicó en la autorización ambiental integrada.

El artículo 19.1 de dicho Decreto Foral establece que “a cualquier actividad o instalación, incluida o no en el Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, se le podrá fijar valores límite diferentes a los establecidos con carácter general en el Anejo 3, para aquellos vertidos de aguas, cuyas circunstancias particulares, debidamente justificadas, así lo aconsejaran”. Su apartado 2 señala que, “en particular, se podrán imponer limitaciones más estrictas en aplicación de la normativa vigente en materia de evaluación de impacto ambiental”.

Pues bien, lo que parece una mera posibilidad (“podrá” dice el precepto) de fijar valores límite específicos, incluso más estrictos que los establecidos en el anexo, la Sentencia lo va a considerar como una obligación de la Administración o un derecho de los causantes de los vertidos si los costes de la reducción de los vertidos son excesivos.

En efecto, la Sentencia recuerda que la inviabilidad económica es una circunstancia esencial o constitutiva de las mejores técnicas disponibles. Y señala que las modificaciones de las autorizaciones ambientales integradas se podrán acordar siempre que no impongan costes excesivos (art. 14 LFIPA), considerando que “dicho supuesto es aplicable al caso en que la instalación es preexistente”. Rechaza también la argumentación de la Administración acerca de la aplicación de dichas técnicas en una explotación de otra Comunidad Autónoma, puesto que “la ponderación de los costes a efectos de determinar si son o no excesivos ha de ser individualizada o en función de las circunstancias de cada caso”. Por otro lado, el informe de la Mancomunidad admitió límites del vertido superiores a los establecidos en la autorización. Y dicho informe

tiene el mismo valor que los informes de los organismos de cuenca a los que sustituye, es decir, carácter vinculante.

La conclusión de la Sentencia es la siguiente: “a la vista de tales circunstancias y antecedentes, ha de concluirse que la resolución recurrida debió hacer uso de la posibilidad prevenida en el repetido artículo 19 del D.F. 16/2006 a efectos de la no aplicación de los límites establecidos para los vertidos litigiosos en su anejo 3 al constar, como consta, la imposibilidad de implantar la MTD necesaria para alcanzar aquellos límites y ser favorable a aquella posibilidad el informe emitido por la Administración competente”.

En mi opinión, la Sentencia está utilizando el concepto de las mejores técnicas disponibles en la dirección opuesta a su finalidad. Esa finalidad consiste en determinar los valores límite de emisión de cada instalación para reducir la contaminación que en conjunto se produce en dicha instalación y, en su caso, modificar esos valores cuando por el desarrollo de nuevas técnicas sea posible reducir significativamente las emisiones.

En este caso, la autorización se limitó a aplicar los niveles máximos de emisión establecidos normativamente. Y, sin embargo, la Sentencia utiliza el concepto de disponibilidad económica de las técnicas para anular las condiciones de la licencia sobre emisiones por no haber hecho uso de la posibilidad (que, según la Sentencia, es de obligado cumplimiento y no potestativa, como da a entender la redacción literal del precepto) de fijar unos límites distintos de los establecidos con carácter general. Una posibilidad que parece prevista para que la Administración pueda fijar niveles de emisión más restrictivos, pero que en este caso el Tribunal obliga a utilizar para rebajar el nivel de protección ambiental establecido con carácter general.

3. Contaminación acústica de las campanas de una iglesia: exclusión de los límites para las llamadas al culto pero no para los avisos horarios

En la anterior crónica daba noticia de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2, de 17 de septiembre de 2010, en la que se rechazaba la solicitud de dos vecinos que exigían el cumplimiento de la normativa foral sobre contaminación acústica en relación con las campanas de una iglesia. La Sentencia confirmó la validez de una ordenanza que, “atendiendo a las prácticas consuetudinarias de la ciudad”,

admite en horario diurno (de 8 a 22 horas) y con el límite de 90 decibelios, entre otros usos, las campanas de iglesias. Se destacaba en la Sentencia la consideración que en distintas disposiciones tiene el uso de las campanas de iglesias y catedrales como elemento fundamental de la tradición cultural española.

Dicha Sentencia fue apelada y el recurso se estimó parcialmente en la STSJ de Navarra de 22 de febrero de 2011. La Sentencia confirma, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa europea y estatal, que las actividades vecinales y las prácticas consuetudinarias del lugar pueden quedar exentas de la normativa general sobre ruido, destacando también la necesidad de salvaguardar el singular uso de las campanas como elemento fundamental de la tradición cultural española.

Considera inadmisibles negar el carácter vecinal del edificio de la iglesia y sus componentes: “No ya es que daten de épocas más antiguas que el medioevo, sino que se olvida la configuración de Pamplona en particular, en sus burgos en derredor de una iglesia, aunque en este caso date del siglo XV, que no es poco, y para atender precisamente a sus vecinos y dentro del vecindario con sus usos y costumbres y a su servicio; más vecinal no puede ser. Negar esto es desconocer la historia y la realidad social de forma imperdonable y bien lo tiene que saber la parte actora a donde acudió a vivir o a habita en derredor de la iglesia de su barrio”.

Ahora bien, la Sentencia introduce una distinción entre las campanas de las iglesias y los relojes acoplados a ellas que lleva a una estimación parcial del recurso. Dice así en su FJ 7.º:

“Efectivamente, no hay problema que en cuanto a la llamada de la(s) campana(s) a los cultos religiosos se da en plenitud lo consuetudinario del aviso y reclamo (en su caso alarma) en vigor y en ello no se alberga duda; 90 decibelios.

Mas no se entiende así en su totalidad respecto del reloj. En este apartado, se puede comprender que habida cuenta de un uso no ya local sino global de la utilización del reloj individual, el aviso horario de la torre-campanario a ella acoplado no tiene mayor razón de ser en su expansión sonora, sí del sonido, pero limitado. Nos referimos a que los avisos horarios del reloj, ante el uso social generalizado del elemento individual (de pulsera, cadena, electrónico, móviles, etc.) ya no hace precisa esa expansión a 90 decibelios, con lo que en este apartado se puede y debe acomodar el límite sonoro a los términos del Decreto Foral 135/1989. En este apartado, por ende, asiste razón al recurrente, según el parecer de la Sala”.

4. Sanciones ambientales

El resto de sentencias de este período se refieren a la imposición de sanciones en aplicación de diversas normas ambientales (véase la relación de sentencias que figura al final de esta crónica).

En todos los supuestos se confirmaron las sanciones. En la mayoría de los casos la controversia se centró en la realidad de los hechos infractores. En estos casos, las sentencias dieron por probados los hechos habida cuenta de la presunción de veracidad de las actas de inspección (por ejemplo, en las sentencias de 25 de febrero de 2011 y de 2 de marzo de 2011).

En dos ocasiones se rechazaba la imputación de los hechos a la persona sancionada. Pero las sentencias confirmaron las sanciones. En la Sentencia de 15 de octubre de 2010 se trataba de una sanción por vertidos procedentes de balsa de decantación de una cantera y no se apreció que la posible aportación ocasional y fortuita de aguas limpias naturales pudiera eximir de responsabilidad al recurrente. En la Sentencia de 2 de marzo de 2011 se rechaza que la responsabilidad pudiera recaer en la empresa contratada para efectuar las mediciones de las emisiones atmosféricas. La responsabilidad corresponde a la empresa titular de la autorización, sin perjuicio de que pueda repetir contra tercero por negligencia, acción u omisión imputables al hacer de la mercantil a la que contrató la empresa sancionada.

La STSJ de Navarra de 5 de octubre de 2010 sobre una sanción en materia de caza presenta alguna afirmación digna de consideración. El sujeto sancionado admitía que había participado en la caza de aves y que entre las piezas abatidas que llevaba en el maletero de su vehículo se hallaba una paloma torcaz, cuya caza estaba vedada en ese momento. El recurrente consideraba que no se había probado que él fuera el autor material del disparo que abatió a la paloma y que fue otro de los miembros del grupo, cuyo nombre no sabía precisar, quien abatió a la torcaz. Pues bien, el Tribunal consideró irrelevante que fuera o no el autor del disparo, ya que este procedía del grupo del que el sancionado formaba parte y, a sabiendas de la ilicitud de la captura de la paloma, “no rehusó aceptar la pieza abatida en el reparto, con lo que asumió el resultado de la acción. Y con él las consecuencias administrativas de su ilicitud”. Concluye la Sentencia que, por ello, resulta innecesario para mantener la procedencia de la sanción apelar a la responsabilidad solidaria establecida en la Ley Foral de Caza para los casos

en que no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la comisión de la infracción, sin perjuicio del derecho de repetir frente a los demás participantes las consecuencias económicas de la sanción.

5. Relación de sentencias comentadas

a) Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-administrativo).

STSJ de Navarra de 5 de octubre de 2010, ponente Fernández Urzainqui. Confirma una sanción en materia de caza. Es irrelevante que no se haya probado quién fue el autor material del disparo que abatió al animal ilícitamente cazado, dado que el sancionado reconoció que formaba parte del grupo de cazadores del que partió el disparo y que no rehusó la pieza abatida que se encontró en su poder, asumiendo con ello el resultado de la acción, además de la eventual responsabilidad solidaria.

STSJ de Navarra de 22 de febrero de 2011, ponente I. Merino Zalba (RJCA 2011\229). Exclusión del uso de las campanas de iglesias y catedrales de las normas de contaminación acústica por su valor cultural, exclusión que no alcanza a los relojes acoplados a las iglesias. La llamada al culto religioso sí está excluida, pero no el aviso horario como reloj.

b) Sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1, de 30 de septiembre de 2010: multa por entrega de residuos (lodos de papelera mezclados con estiércol) a gestores no autorizados. No vulneración de los principios de tipificación y proporcionalidad.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2, de 15 de octubre de 2010: sanción por vertidos procedentes de balsa de decantación de una cantera, sin que se aprecie que la posible aportación ocasional y fortuita de aguas limpias naturales pueda eximir de la responsabilidad.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2, de 18 de octubre de 2010: sanción por instalación de un vertedero sin autorización en una cantera.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3, de 25 de febrero de 2011: sanción por vertido de aguas residuales sin tratamiento alguno causando mortalidad de peces en la zona.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2, de 1 de marzo de 2011: sanción por realizar emisiones de compuestos orgánicos volátiles muy superiores a los límites establecidos en la legislación y en la autorización.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3, de 2 de marzo de 2011: sanción por vulnerar las condiciones de funcionamiento sobre emisiones a la atmósfera.

Sumari: 1. Introducció. 2. Les millors tècniques disponibles i la inviabilitat econòmica en la reducció d'abocaments. 3. La contaminació acústica de les campanes d'una església: exclusió dels límits per a les crides al culte però no per als avisos horaris. 4. Sancions ambientals. 5. Relació de sentències comentades.

1. Introducció

De les sentències d'aquest període en destaquem dues que estimen, almenys parcialment, els recursos presentats contra les resolucions administratives corresponents. Una tracta de la imposició de valors límit d'emissió en una autorització ambiental integrada que es consideren excessius perquè són inviables econòmicament, malgrat que les emissions autoritzades eren les que estableix la normativa aplicable. L'altra tracta sobre la contaminació acústica de les campanes d'una església. La sentència distingeix entre les campanades per cridar al culte (que estan excloses dels límits sonors establerts reglamentàriament) i els avisos horaris del rellotge (que estan sotmesos als límits esmentats).

La resta de les sentències són confirmatòries de les sancions imposades per haver infringit la normativa ambiental i rebutgen els motius de les parts recurrents que s'hi oposen.

2. Les millors tècniques disponibles i la inviabilitat econòmica en la reducció d'abocaments

L'autorització ambiental integrada per a una instal·lació de fabricació de productes químics va incloure, entre altres, que l'abocament de clorurs no superés els límits següents: 13,2 t/dia fins al 31 de desembre de 2010 i 2 g/l des de l'1 de gener de 2011.

La titular de la llicència va recórrer en alçada i, posteriorment, en via contenciosa perquè considerava que la segona condició no era conforme a dret. En primer lloc, la sentència rebutja la pretensió de nul·litat de la resolució per motius formals (absència de procediment i incompetència manifesta).

Els altres motius d'oposició presenten més interès. La part recurrent considera que haver reduït els límits de l'abocament resulta injustificat perquè s'aparta del precedent i de l'informe vinculant de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona i, també, perquè les solucions tècniques necessàries per realitzar la reducció resulten econòmicament

inviabils, especialment pel poc temps de vida que resta a l'exploració, que previsiblement haurà de cessar el 2010.

La sentència nega que no hi hagi motivació i que s'hagués apartat del precedent, atès que respecte dels procedents hi ha una novetat normativa l'aplicació de la qual justifica el canvi de criteri de l'Administració.

Aquesta nova normativa és el Decret foral 12/2006, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen les condicions tècniques aplicables a la implantació i al funcionament de les activitats susceptibles de realitzar abocaments d'aigües a col·lectors públics de sanejament.

Aquest decret foral en l'annex 3 estableix els valors límit d'abocament de contaminants. I és el que es va aplicar en l'autorització ambiental integrada.

L'article 19.1 del decret foral estableix que *“a cualquier actividad o instalación, incluida o no en el Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, se le podrá fijar valores límite diferentes a los establecidos con carácter general en el Anejo 3, para aquellos vertidos de aguas, cuyas circunstancias particulares, debidamente justificadas, así lo aconsejaran”*. L'apartat 2 assenyala que *“en particular, se podrán imponer limitaciones más estrictas en aplicación de la normativa vigente en materia de evaluación de impacto ambiental”*.

Doncs bé, el que sembla una mera possibilitat de fixar valors límits específics (“podrà”, diu el precepte), fins i tot més estrictes que els que estableix l'annex, la sentència ho considerarà com una obligació de l'Administració o com un dret dels causants dels abocaments si els costos per reduir els abocaments són excessius.

En efecte, la sentència recorda que la inviabilitat econòmica és una circumstància essencial o constitutiva de les millors tècniques disponibles. I assenyala que les modificacions de les autoritzacions ambientals integrades es poden acordar sempre que no imposi costos excessius (art. 14 LFIPA), considerant que *“dicho supuesto es aplicable al caso en que la instalación es preexistente”*. També rebutja l'argumentació de l'Administració sobre l'aplicació d'aquestes tècniques en l'exploració d'una altra comunitat autònoma, ja que *“la ponderación de los costes a efectos de determinar si son o no excesivos ha de ser individualizada o en función de las circunstancias de cada caso”*. D'altra banda, l'informe de la Mancomunitat va admetre límits superiors de

l'abocament als que estableix l'autorització. I aquest informe té el mateix valor que el dels organismes de conca que substitueix, és a dir, caràcter vinculant.

La conclusió de la sentència és la següent: *“a la vista de tales circunstancias y antecedentes, ha de concluirse que la resolución recurrida debió hacer uso de la posibilidad prevenida en el repetido artículo 19 del D.F. 16/2006 a efectos de la no aplicación de los límites establecidos para los vertidos litigiosos en su anejo 3 al constar, como consta, la imposibilidad de implantar la MTD necesaria para alcanzar aquellos límites y ser favorable a aquella posibilidad el informe emitido por la Administración competente”*.

Al meu parer, la sentència utilitza el concepte de les millors tècniques disponibles en la direcció oposada a la seva finalitat. Aquesta finalitat consisteix a determinar els valors límit d'emissió de cada instal·lació per reduir la contaminació que es produeix en la instal·lació i, si escau, modificar-los quan es puguin reduir significativament les emissions a causa del desenvolupament de noves tècniques.

En aquest cas, l'autorització es va limitar a aplicar els nivells màxims d'emissió establerts normativament. I, no obstant això, la sentència utilitza el concepte de disponibilitat econòmica de les tècniques per anul·lar les condicions de la llicència sobre emissions, per no haver fet ús de la possibilitat d'establir uns límits diferents dels establerts amb caràcter general (que segons la sentència és de compliment obligatori i no potestativa, com dóna a entendre la redacció literal del precepte). Una possibilitat que sembla prevista perquè l'Administració pugui fixar nivells d'emissió més restrictius, però que, en aquest cas, el Tribunal obliga a utilitzar-la per rebaixar el nivell de protecció ambiental establert amb caràcter general.

3. La contaminació acústica de les campanes d'una església: exclusió dels límits per a les crides al culte però no per als avisos horaris

En la crònica anterior donàvem notícia d'una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de 17 de setembre de 2010, en la qual es rebutjava la sol·licitud de dos veïns que exigien que es complís la normativa foral sobre contaminació acústica pel que fa a les campanes d'una església. La sentència va confirmar la validesa de l'ordenança, que, *“atendiendo a las prácticas consuetudinarias de la ciudad”*, admet en horari diürn (de 8 a 22 hores) i amb el límit de 90 decibels, entre altres usos, les

campanes d'esglésies. La sentència destacava la consideració que diferents disposicions tenen l'ús de les campanes d'esglésies i catedrals com a element fonamental de la tradició cultural espanyola.

Aquesta sentència va ser apel·lada i el recurs es va estimar parcialment en la STSJ de Navarra de 22 de febrer de 2011. La sentència confirma, d'acord amb el que disposa la normativa europea i estatal, que les activitats veïnals i les pràctiques consuetudinàries del lloc poden quedar exemptes de la normativa general sobre soroll, i també destaca la necessitat de salvaguardar l'ús singular de les campanes com a element fonamental de la tradició cultural espanyola.

Considera inadmissible negar el caràcter veïnal de l'edifici de l'església i els seus components. *“No ya es que daten de épocas mas antiguas que el medioevo, sino que se olvida la configuración de Pamplona en particular, en sus burgos en derredor de una iglesia, aunque en este caso date del siglo XV, que no es poco, y para atender precisamente a sus vecinos y dentro del vecindario con sus usos y costumbres y a su servicio; más vecinal no puede ser. Negar esto es desconocer la historia y la realidad social de forma imperdonable y bien lo tiene que saber la parte actora a donde acudió a vivir o a habitar en derredor de la iglesia de su barrio”*.

Ara bé, la sentència distingeix entre les campanes de les esglésies i els rellotges acoblats, fet que porta a l'estimació parcial del recurs. En l'apartat f. j. 7è diu així:

“Efectivamente, no hay problema que en cuanto a la llamada de la(s) campana(s) a los cultos religiosos se da en plenitud lo consuetudinario del aviso y reclamo (en su caso alarma) en vigor y en ello no se alberga duda; 90 decibelios.

Mas no se entiende así en su totalidad respecto del reloj. En este apartado, se puede comprender que habida cuenta de un uso no ya local sino global de la utilización del reloj individual, el aviso horario de la torre-campanario a ella acoplado no tiene mayor razón de ser en su expansión sonora, sí del sonido, pero limitado. Nos referimos a que los avisos horarios del reloj, ante el uso social generalizado del elemento individual (de pulsera, cadena, electrónico, móviles etc.) ya no hace precisa esa expansión a 90 decibelios, con lo que en este apartado se puede y debe acomodar el límite sonoro a los términos del Decreto Foral 135/1989. En este apartado, por ende, asiste razón al recurrente, según el parecer de la Sala”.

4. Sancions ambientals

La resta de sentències d'aquest període fan referència a la imposició de sancions en aplicació de diverses normes ambientals (vegeu la relació de sentències que figura al final de la crònica).

Les sancions es van confirmar en tots els supòsits. En la majoria dels casos la controvèrsia es va centrar en la realitat dels fets infractors. En aquests casos, les sentències van donar per provats els fets tenint en compte la presumpció de veracitat de les actes d'inspecció (per exemple en la Sentència de 25 de febrer de 2011 i en la Sentència de 2 de març de 2011).

En dues vegades es rebutjava la imputació dels fets a la persona sancionada. Però les sentències van confirmar les sancions. En la Sentència de 15 d'octubre de 2010 es tractava d'una sanció per abocaments procedents de la bassa de decantació d'una pedrera i no es va apreciar que la possible aportació ocasional i fortuïta d'aigües netes naturals pogués eximir la part recurrent de responsabilitat. En la Sentència de 2 de març de 2011 es rebutja que la responsabilitat pogués recaure en l'empresa contractada per efectuar els mesuraments de les emissions atmosfèriques. La responsabilitat correspon a l'empresa titular de l'autorització, sense perjudici que pugui repetir contra tercer per negligència, acció o omissió imputables, segons la manera fer de la mercantil a la qual va contractar l'empresa sancionada.

La STSJ de Navarra de 5 d'octubre de 2010 sobre una sanció en matèria de caça, presenta alguna afirmació digna de considerar. El subjecte sancionat admetia que havia participat en la caça d'aus i que entre les peces abatudes que portava al maleter del vehicle hi havia un tudó, la caça del qual estava vedada en aquell moment. El recurrent considerava que no s'havia provat que ell fos l'autor material del tir que va abatre el tudó i que va ser un altre membre del grup, el nom del qual no sabia precisar. Doncs bé, el Tribunal va considerar irrellevant el fet que fos o no l'autor del tir, ja que aquest tir procedia del grup de què el sancionat formava part i que, sabent la il·licitud de la captura del tudó, *“no rehusó aceptar la pieza abatida en el reparto, con lo que asumió el resultado de la acción. Y con él las consecuencias administrativas de su ilicitud”*. La sentència conclou que, per això, per mantenir la procedència de la sanció, resulta innecessari apel·lar a la responsabilitat solidària que estableix la llei foral de caça per als casos en què no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones

que han intervingut en la comissió de la infracció, sense perjudici del dret de repetir enfront dels altres participants les conseqüències econòmiques de la sanció.

5. Relació de sentències comentades

a) Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (Sala Contenciosa Administrativa).

STSJ de Navarra de 5 d'octubre de 2010, ponent Fernández Urzainqui. Confirma una sanció en matèria de caça. És irrellevant que no s'ha provat qui va ser materialment l'autor del tir que va abatre l'animal caçat il·lícitament, atès que la persona sancionada va reconèixer que formava part del grup de caçadors del qual va sortir el tir i que —a més de l'eventual responsabilitat solidària— i que no va refusar la peça abatuda que es va trobar en el seu poder, de manera que va assumir el resultat de l'acció.

STSJ de Navarra de 22 de febrer de 2011, ponent I. Merino Zalba (RJCA 2011\229). Exclusió de l'ús de campanes d'esglésies i catedrals de les normes de contaminació acústica pel seu valor cultural. Exclusió que no afecta els rellotges acoblats a les esglésies. La crida al culte religiós sí que està exclosa, però no l'avís horari com a rellotge.

b) Sentències dels jutjats contenciosos administratius.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, de 30 de setembre de 2010: multa per haver entregat residus (fangs de papereria mesclats amb fem) a gestors no autoritzats. No es vulneren els principis de tipificació i proporcionalitat.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de 15 d'octubre de 2010: sanció per abocaments procedents de la bassa de decantació d'una pedrera, sense que s'apreciï que la possible aportació ocasional i fortuïta d'aigües netes naturals pugui eximir de la responsabilitat.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de 18 d'octubre de 2010: sanció per haver instal·lat un abocador en una pedrera sense autorització.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de 25 de febrer de 2011: sanció per l'abocament d'aigües residuals sense cap tractament, el qual ha causat mortalitat piscícola a la zona.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, d'1 de març de 2011: sanció per emissions de compostos orgànics volàtils molt superiors als límits que estableixen la legislació i l'autorització.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de 2 de març de 2011: sanció per haver vulnerat les condicions de funcionament sobre emissions a l'atmosfera.